

Ciudad de México a 21 de febrero de 2025
CEAVICDMX/123/2025

LIC. EDGAR ALEJANDRO GÓMEZ JAIMES
COORDINADOR DEL REGISTRO DE VÍCTIMAS
PRESENTE.

En los autos del JUICIO DE AMPARO 1242/2024, promovido por JOSÉ DAVID GONZÁLEZ CAMACHO, ante el juzgado DÉCIMO PRIMERO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN LA CIUDAD DE MÉXICO y en atención al OFICIO: 3489/2025 signado por el SECRETARIO DEL JUZGADO, y recibido el veinte de febrero de este año, le solicito atender a más tardar el 11 de marzo del presente año, marcando copia a esta oficina.

Sin otro particular, le agradezco las atenciones que preste a la misma.



Lic. Ernesto Alvarado Ruiz
Comisionado Ejecutivo de Atención a
Víctimas de la Ciudad de México



Elaboró: RRS

AUTORIZÓ: DVFE





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del
Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab."

14-15
3489/2025 COORDINADORA DEL REGISTRO DE VÍCTIMAS DE LA
COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO (AUTORIDAD RESPONSABLE) SE ANEXA COPIA DEL
ESCRITO DE AMPLIACIÓN DE DEMANDA.

24
3490/2025 COMITÉ INTERDISCIPLINARIO EVALUADOR DE LA
COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE LA CIUDAD
DE MÉXICO (AUTORIDAD RESPONSABLE) SE ANEXA COPIA DEL
ESCRITO INICIAL DE DEMANDA Y DE AMPLIACIÓN

EN LOS AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO 1242/2024, PROMOVIDO
POR José David González Camacho, SE DICTÓ UN PROVEÍDO QUE
EN LO CONDUCENTE ESTABLECE:

"Ciudad de México, a diez de febrero de dos mil veinticinco.

Agréguese a los autos el escrito de cuenta, mediante el cual la
parte quejosa amplía la demanda de amparo; por tanto, se procede a
dictar el acuerdo conducente.

En ese sentido, con fundamento en los artículos 103, fracción I
y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal; 1, fracción I, 37,
107, 108, 111, 115, 116, 117 y relativos de la Ley de Amparo vigente,
se tiene POR AMPLIADA LA DEMANDA DE AMPARO, respecto del
Comité Interdisciplinario Evaluador de la Comisión Ejecutiva de
Atención a Víctimas de la Ciudad de México de quien se reclama la
omisión de elaborar el dictamen en el que se determine el ingreso o
negativa al registro de atención a víctimas correspondiente.

Recebi:
20-02-2025
17:30 hrs
Ramos
Con copia simple del escrito de demanda y de ampliación,
pidase el informe justificado, a la nueva autoridad señalada como
responsable, quien deberá rendirlo dentro del plazo de quince días
siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído,
debiendo hacerlo por escrito y acompañando copias certificadas de
todas las constancias relacionadas con el acto reclamado, en la
inteligencia que de no hacerlo se le impondrá una multa por el
equivalente a cien unidades de medida y actualización vigente, de
conformidad con el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en
relación con el artículo segundo transitorio del Decreto por el que se
declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia
de desindexación del salario mínimo y 5 de la Ley para Determinar el
Valor de la Unidad de Medida y Actualización.

Se requiere a las partes para que en el supuesto de que hubiese
alguna causa de sobreseimiento la hagan saber a este juzgado,
apercibidas que de no cumplir con esa obligación se les impondrá
multa por el equivalente a treinta unidades de medida y
actualización, en términos del ordinal 251 de la ley de la materia en
relación con el artículo segundo transitorio del Decreto invocado.

Dese la intervención que corresponde al agente del Ministerio
Público de la Federación adscrito, a quien deberá notificarse por
medio de lista, en términos del artículo 26, fracción III, de la Ley de
Amparo, en virtud de que en este asunto no se actualiza la hipótesis



prevista en la fracción II, inciso c), del artículo citado, ya que no se reclaman normas generales.

Se informa a la nueva autoridad que se encuentran señaladas las diez horas con treinta minutos del veintiséis de marzo de dos mil veinticinco para que tenga verificativo la audiencia constitucional.

Se autoriza a la nueva autoridad el uso de medios electrónicos y digitales, en la inteligencia que las reproducciones que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009.

Finalmente, hágase del conocimiento de la nueva autoridad que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, pero éstas podrán oponerse a la publicación de los datos personales, en términos del artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Notifíquese.


Así lo proveyó y firma Mariza Arellano Pompa, Secretaria en funciones de Jueza del Juzgado Decimoprimer de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, designada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el día veintiocho de agosto de dos mil veinticuatro y comunicada en oficio SEADS/3219/2024, de igual fecha, con la Secretaria Stefan Arrazola Chávez, que autoriza y da fe. Doy fe."

LO QUE COMUNICO A USTED PARA LOS EFECTOS LEGALES PROCEDENTES.

CIUDAD DE MÉXICO, A diez de febrero de dos mil veinticinco.


Stefan Arrazola Chávez

SECRETARIO DEL JUZGADO DECIMOPRIMERO DE DISTRITO EN
MATERIA ADMINISTRATIVA EN LA CIUDAD DE MÉXICO.



512
CE FIC-7 A 9, 60

Quejoso:

José David González Camacho

512
Juicio de amparo indirecto

Expediente 1242/2024

Jueza Decimoprimerá de Distrito en Materia
Administrativa en la Ciudad de México,
del Poder Judicial de la Federación.

José David González Camacho, por derecho propio,
ante usted expongo:

Desahogo de requerimiento:

Con fundamento en los artículos 1, 8, 14, 16, 17, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 111, de
la Ley de Amparo, y demás preceptos aplicables, desahogo el
requerimiento que esta juzgadora federal formuló al
suscrito en proveído del cuatro de febrero de dos mil
veinticinco, en los términos siguientes:

Ampliación de demanda:

Vistas las constancias que integran el presente juicio de
amparo, con fundamento en los artículos 1, 8, 14, 16, 17, 103,
fracción I, 107, fracciones I, II, IV, y VII, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, fracción I, 2, 3, 5,

fracción I, 6, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción II, 108, 110, 111, 112, 115, 116, 117, de la Ley de Amparo, y demás preceptos aplicables, **amplió mi demanda de amparo en los términos siguientes:**

1. Nombre y domicilio del tercero interesado:

A consideración del suscrito, no existe ninguna persona que deba ser llamada a este juicio con tal carácter.

2. Autoridad responsable:

Comité Interdisciplinario Evaluador de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México.

3. Omisión reclamada:

La omisión de emitir el dictamen y/u opinión técnica de ingreso o, en su caso, negativa de ingreso del suscrito al Registro de Víctimas de la Ciudad de México, en el expediente administrativo CEAVI/CIE/099/2024.

4. Bajo protesta de decir verdad, manifiesto ante este órgano jurisdiccional los hechos que constituyen los antecedentes de la omisión reclamada:

a. Mediante escrito presentado el pasado doce de enero de dos mil veinticuatro, el suscrito solicitó al titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México mi ingreso al Registro de Víctimas de la Ciudad de México como víctima indirecta del homicidio cometido en agravio de mi padre José González Aguirre.

b. Con motivo de dicha solicitud, se integró el expediente administrativo CEAVI/CIE/099/2024, y una vez que quedó integrado, la coordinadora del Registro de Víctimas lo remitió al Comité Interdisciplinario Evaluador a través del oficio CEAVICDMX/DFV/RELOVI/889/2024, el cual fue recibido en dicho Comité el siete de noviembre de dos mil veinticuatro, a efecto de que emitiera el dictamen y/u opinión técnica de ingreso o, en su caso, negativa de ingreso del suscrito al Registro de Víctimas de la Ciudad de México.

c. Sin embargo, a la fecha, y después de tres meses de que el Comité Interdisciplinario Evaluador recibió el expediente administrativo CEAVI/CIE/099/2024 debidamente integrado, la autoridad responsable ha sido omisa en emitir el dictamen y/u opinión técnica respectiva.

5. Preceptos constitucionales que contienen los derechos fundamentales cuya violación se reclama:

Considero violados en mi perjuicio los artículos 8, 14, 16 y 17 de la Constitución General de la República, los cuales reconocen a mi favor los derechos fundamentales de petición, de seguridad jurídica, y de tutela jurisdiccional efectiva, respectivamente, así como sus garantías de legalidad, debido proceso, e impartición de justicia pronta y expedita.

6. Conceptos de violación:

➤ Único:

Existe una violación simultánea a los derechos fundamentales aludidos, pues, por un lado, la falta de respuesta por parte de la autoridad responsable implica una negativa al derecho que le asiste al suscrito de que se me imparta justicia pronta en los términos y plazos que fijan las leyes y, por otro

lado, con la omisión reclamada se me coloca en estados de indefensión e incertidumbre jurídica, al no poder conocer mi exacta situación jurídica frente al orden público.

Considero aplicable al caso concreto, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 7/2015 (10a.), dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, divulgada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, consultable en el libro 17, tomo I, página 480, de abril de dos mil quince, con registro digital 2008884, y que estatuye lo siguiente:

"DERECHO DE PETICIÓN. LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO NO PUEDE RECLAMARSE DE MANERA AUTÓNOMA.

El artículo 8o. constitucional impone a la autoridad la obligación de dar respuesta, en breve término, a la solicitud formulada por un particular; por su parte los artículos 14 y 17 constitucionales regulan el debido proceso, así como el derecho de acción, a través de los cuales se busca obtener una decisión en la que se resuelvan de forma completa las pretensiones deducidas, mediante el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento. En razón de ello, los procedimientos ventilados ante organismos jurisdiccionales o aquellos seguidos ante autoridades que realicen funciones materialmente jurisdiccionales, se rigen bajo las garantías previstas en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, resulta jurídicamente inadmisible que se pueda reclamar de manera autónoma la omisión de dar respuesta a una petición en términos del artículo 8o. constitucional, cuando el particular eleva una solicitud a un funcionario público dentro de un juicio o dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, puesto que las reglas que rigen estos procedimientos son tanto las previstas en los artículos 14 y 17 constitucionales, así como las que desarrollan dichos derechos en la legislación secundaria. No obstante ello, la autoridad está obligada a analizar, conforme a los principios de indivisibilidad e interdependencia previstos en el artículo 1o. constitucional, los derechos como una unidad, no de forma aislada, sino como una totalidad indisoluble y exenta de jerarquía. Así, al concebirse de forma unitaria, se podrá resolver de mejor manera la omisión que reclama el particular dentro del procedimiento."

En efecto, por virtud de los derechos fundamentales

que los artículos 8, 14, 16 y 17 de la Constitución General de la República reconocen a mi favor, la autoridad responsable tiene la obligación de (1) resolver mi petición, (2) de manera fundada y motivada, y (3) dentro del término que para tal efecto establece la ley de la materia.

Lo anterior, a fin de que el suscrito tenga conocimiento de la procedencia o improcedencia de mi petición.

Para ello, debe tenerse presente lo previsto en el artículo 22 del Reglamento de la Ley de Víctimas para la Ciudad de México, el cual establece lo siguiente:

"Artículo 22. En el caso de que la solicitud de ingreso al Registro contenga el reconocimiento de las autoridades señaladas en el artículo 4, fracción I, II, III y IV de la Ley, recibida la solicitud respectiva, el Registro procederá a la inscripción respectiva, siempre que se haya cumplido formal y cualitativamente con la información recabada en el Formato Único y de la documentación que acompañe y soporte dicho formato, tratándose de delitos de alto impacto social y/o de violaciones graves y trascendentes en derechos humanos, a que se refiere el siguiente artículo.

No obstante, el Registro podrá solicitar a las autoridades jurisdiccionales información complementaria a fin de satisfacer los requisitos señalados en los artículos 33 de la Ley General, así como el llenado debido o aclaraciones respectivas respecto al Formato Único de Declaración, las que deberán suministrarla en un plazo no mayor de diez días naturales, en términos del numeral 145 de la Ley.

Tratándose de solicitudes provenientes de las autoridades señaladas en la fracción V del artículo 4 de la Ley o de víctimas usuarias, a fin de satisfacer los requisitos señalados en los artículos 33 de la Ley General, el Registro podrá solicitar la información o documentación que considere necesaria a cualquiera de las autoridades de la Ciudad de México o a la Comisión, las que estarán en el deber de suministrarla en un plazo que no supere los diez días naturales, en términos del numeral 145 de la Ley, en relación con el diverso 71 y 77 de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos de la ciudad de México.

Una vez que se encuentren satisfechos los requisitos de forma y fondo, en los casos

que requieren valoración adicional, en términos del artículo 3 y 23 del presente Reglamento, en relación con el artículo 4, fracción V de la Ley, el Comité Interdisciplinario previa remisión del expediente por el Registro, en su caso, emitirá un dictamen de ingreso favorable, en un plazo que no excederá de treinta días hábiles, mismo que remitirá el Registro, conjuntamente con el expediente, a fin de que proceda a la inscripción en el Registro de Víctimas.

En caso contrario, o bien, tratándose de delitos que no se consideren de alto impacto social o violaciones graves y trascendentes en derechos humanos, el Comité Interdisciplinario emitirá un dictamen de negativa, debidamente fundamentado y motivado, mismo que será remitido al Registro para la emisión del acuerdo de negativa de inscripción al Registro y sea notificado a la persona usuario respectiva, en un plazo no mayor a diez días hábiles."

Así, la obligación de la autoridad responsable de resolver la petición del suscrito, de manera fundada y motivada, no puede exceder en total del plazo de treinta días hábiles.

Sin embargo, como se mencionó en los antecedentes de esta demanda, ya ha transcurrido, y sumamente en exceso, el plazo de treinta días hábiles que la ley otorga a la autoridad responsable para resolver en definitiva la petición del suscrito.

Corolario: En mérito de lo anterior, solicito a esta juzgadora federal tenga a bien declarar fundado este concepto de violación y, en consecuencia, conceda al suscrito la Protección Constitucional de la Justicia de la Unión para el efecto de que la autoridad responsable emita el dictamen y/o la opinión técnica que en derecho corresponda, de manera fundada, motivada, completa y congruente, respecto de la solicitud del suscrito de ingreso al Registro de Víctimas de la Ciudad de México formulada mediante escrito presentado el pasado doce de enero de dos mil veinticuatro.

Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio contenido en

la tesis de jurisprudencia XVI.10.A. J/38 (10a.), dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, divulgada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, visible en el libro 46, tomo III, página 1738, de septiembre de dos mil diecisiete, con registro digital 2015181, y cuyos rubro y texto son los siguientes:

“DERECHO DE PETICIÓN. EL EFECTO DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO EN UN JUICIO EN EL QUE SE EXAMINÓ SU VIOLACIÓN. NO PUEDE QUEDAR EN LA SIMPLE EXISTENCIA DE UNA RESPUESTA, SINO QUE REQUIERE QUE ÉSTA SEA CONGRUENTE, COMPLETA, RÁPIDA Y, SOBRE TODO, FUNDADA Y MOTIVADA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).

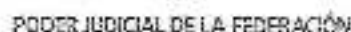
El derecho de petición, que es una prerrogativa gestada y promovida en el seno del Estado democrático -en el cual es concebible la posibilidad de participación activa de las personas en la vida pública-, se respeta sólo si la autoridad proporciona en su respuesta a la solicitud del particular la suficiente información para que éste pueda conocer plenamente su sentido y alcance, así como para manifestar su conformidad o inconformidad con ella y, en su caso, impugnarla. Por ende, si la información no existe o es insuficiente, el derecho de petición se quebranta, porque de nada sirve al particular que su planteamiento sea contestado, aun con pulcritud lógica, es decir, respondiendo con la debida congruencia formal a lo solicitado, pero sin proporcionarle la información que le permita conocer cabalmente el acto, decisión o resolución de la autoridad. Lo anterior, en virtud de que la congruencia formal de la respuesta a una petición no es suficiente para ser acorde con el actual sistema jurídico mexicano, porque no satisface las exigencias previstas en el artículo 8o., en relación con el numeral 1o., en sus primeros tres párrafos, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que manda el respeto del ejercicio del derecho de petición, siempre que éste se formula por escrito, de manera pacífica, respetuosa y conforme al principio de progresividad, que evoca la necesidad de avance en la defensa de los derechos humanos en general. Por otra parte, la entrada en vigor de la Ley de Amparo, el 3 de abril de 2013, en aras de una justicia pronta y completa, tratándose de este derecho, pretende evitar prácticas dilatorias, como son la omisión de respuesta, la incongruencia, falsa, equívoca o carente de fundamentos y motivos de ésta o su incorrección en cuanto al fondo, para lo cual proporciona herramientas que efectivizan el respeto a los derechos humanos a la seguridad jurídica y a la tutela judicial efectiva, para hacer posible que esos vicios se reparen en un mismo juicio; tal es el caso de la oportunidad de ampliar la demanda a que se refiere el numeral III del citado ordenamiento y de la exigencia para la responsable, tratándose de actos materialmente administrativos, de complementar en su informe

justificado la falta o insuficiencia de fundamentación y motivación del acto reclamado cuando se aduce en la demanda, contenida en el artículo 117, último párrafo, de la propia ley. Por tanto, el efecto de la concesión del amparo en un juicio en el que se examinó la transgresión al artículo 8o. constitucional no puede quedar en la simple exigencia de respuesta, sino que debe buscar que ésta sea congruente, completa, rápida y, sobre todo, fundada y motivada; de otro modo, no obstante el nuevo sistema jurídico, el juzgador obligaría al gobernado a una nueva instancia para obtener una solución de fondo, con el consiguiente retraso en la satisfacción de la reparación del derecho violado."

Por virtud de todo lo anteriormente expuesto y fundado, solicito a esta juzgadora federal tenga a bien admitir a trámite la presente ampliación de demanda, en los términos de ley.

Venustiano Carranza, Ciudad de México,
06 de febrero de 2025

José David González Camacho
{Firmado electrónicamente}



Este documento digital es una copia fiel de su versión física distribuida. La más genuina reside en su original.

[illegible]

